

**Modifica la ley N° 18.695, ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,  
eliminado las inhabilidades que afectan al personal codocente para optar a  
cargos de votación popular  
Boletín N° 5140-06**

**VISTOS:**

Lo dispuesto en los Artículos 1°, 19°, 63° y 65° de la Constitución Política de la República; en la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.

**CONSIDERANDO:**

1° Que, el personal codocente en la educación es fundamental por el apoyo diario que presta a la reforma educacional tanto en lo valórico, como en lo relativo a convivencia escolar, prevención de drogas, deserción escolar, etc. Además, los codocentes generan una instancia resolutoria de problemas igualmente fundamental y útil a la desempeñada por los docentes de cada establecimiento y, junto con ello, el paradocente cuenta con un conocimiento extra aula del alumno, circunstancia que permite ahondar en el perfeccionamiento y capacitación del estudiante, para que su accionar sea eficaz. Más aún, actualmente CONACE pretende desarrollar un programa de capacitación que oriente al personal codocente en el tema de las drogas. La idea es que el codocente (inspector, bibliotecario y/u orientador) reconozca la magnitud del problema de las drogas, fortalezca su rol de agente preventivo, y contribuya con los directivos y docentes a consolidar un cambio de actitud y conducta en los alumnos en pro de la prevención. Todo esto, asumiendo que mantiene una estrecha relación con ellos fuera del aula, y porque muchas veces es el encargado de aplicar las normas y reglamentos del establecimiento.

Como podemos apreciar, resulta esencial que las autoridades tomen conciencia que el personal codocente juegan un importante rol educativo tanto en relación a los alumnos, como así mismo, respecto a las familias y la comunidad. Por lo tanto, beneficiar al personal paradocente al menos en lo que a salud y retiro respecta, constituye una retribución mínima que merece ser estudiada por el ejecutivo a la brevedad posible.

2° Que, que las reivindicaciones históricas que el personal codocente ha pretendido se plasmen en derechos concretos y beneficios para el sector, entre otras son:

**a.- Incrementar las remuneraciones:** Incluyendo, además, la entrega de bonos.

**b.- Perfeccionar las normas laborales:** Reformando la reglamentación sobre concursos, estableciendo normas para cautelar la concursabilidad de los cargos bajo administración municipal, mejorando el funcionamiento de la dotación codocente municipal, reformando la reglamentación sobre autorización y habilitación para el ejercicio de la actividad codocente, perfeccionando las normas de sumarios a los codocentes bajo administración municipal, reglamentando el tema de las horas extras de trabajo, etc.

**c.- Regular el tema de las enfermedades profesionales y retiro.**

**d.- Apoyar, especialmente, a los codocentes de establecimientos en condiciones de vulnerabilidad social.**

**e.- Fortalecer la actividad codocente y crear nuevas oportunidades de carrera. f.-**

**f.- Establecimiento de una carrera funcionaria.**

**g.- Elaboración de un estatuto que rijan la función codocente.**

**h.- Asignación de zona.**

**i.- Establecimiento de asignaciones de excelencia y desempeño difícil.**

**j.- Becas de estudio**

**k.- Establecimiento expreso de las horas de trabajo.**

3° Que, los estudiantes, los profesores e incluso los padres y apoderados han experimentado cambios significativos relativos al rol que desempeñan en el proceso educativo, lo que constituye, sin lugar a dudas, un avance real en la materia. Sin embargo, el personal docente que desempeña funciones en los distintos recintos educacionales de nuestro país, se ha visto marginado de los cambios que hoy invaden al sector y que auguran un progreso sistemático en la condición de los distintos estamentos que dan forma al sistema educativo. La situación resulta preocupante, si consideramos que el trabajo desarrollado por estas personas es absolutamente fundamental para el correcto funcionamiento de cualquier establecimiento de enseñanza.

4° Que, la privatización de servicios está causando graves perjuicios al personal docente que labora en colegios subvencionados y municipales, a pesar que los dirigentes del sector se han reunido con autoridades estatales durante el transcurso de los últimos dos años, con el objeto de solucionar el tema de la estabilidad laboral y dar a conocer las circunstancias que caracterizan su actividad y que perjudican el progresivo desarrollo de ésta en el futuro.

Los docentes están actualmente muy preocupados, porque en algunos establecimientos educacionales se inició la contratación de servicios externos para realizar tareas de aseo y vigilancia. La circunstancia descrita genera otro problema adicional, y es que los apoderados han manifestado su preocupación, porque nadie puede velar por el tipo de personas que llegarán a trabajar cerca de los alumnos de mantenerse la contratación de empresas externas para realizar tareas dentro de los recintos educacionales. Como resulta evidente, en un establecimiento educacional tanto los profesores, auxiliares, inspectores y vigilantes, conforman la comunidad escolar, por lo tanto, de ingresar empresas de servicio externas a los colegios, esa comunidad se quebrará.

5° Que, el pasado Martes 05 de junio del año en curso el Ministerio de Educación hace envío del "**Proyecto de Ley que introduce modificaciones a la Ley 19.464 y otorga otros beneficios que indica**", para su tramitación en el Parlamento obviando el compromiso de revisarlo primeramente con los dirigentes docentes. Esta circunstancia se tradujo en que, de los 33 puntos con que cuenta el protocolo de acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación y los dirigentes del sector, solo 3 aparecen en el proyecto de ley aludido y estos, además, están dotados de un texto distinto al acordado. Esta situación es una burla y falta de respeto para con los trabajadores docentes de Chile, y sigue manteniendo la discriminación histórica que experimenta el sector.

6° Que, sumado a todo lo anterior, la institucionalidad y el ordenamiento jurídico chileno obstaculizan, sin sentido real alguno, la posibilidad que un docente opte a cargos de votación popular; situación que es menester modificar a la brevedad.

**POR TANTO,**

Los diputados que suscriben vienen en someter a vuestra consideración el siguiente,

**PROYECTO DE LEY**

**MODIFICA LA LEY N° 18.695, LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, ELIMINANDO LAS INHABILIDADES QUE AFECTAN AL PERSONAL CODOCENTE PARA OPTAR A CARGOS DE VOTACION POPULAR**

**Artículo 1°:** Modifíquese el inciso primero del artículo 59° de la ley 18.700, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y reemplácese el texto actual de la norma por el siguiente:

"El cargo de alcalde será incompatible con el ejercicio de cualquier otro empleo o función pública retribuido con fondos estatales, con excepción de los empleos o funciones docentes y paradocentes de educación básica, media o superior, hasta el límite de doce horas semanales".

**Artículo 2°:** Modifíquese el inciso primero del artículo 75° de la ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y reemplácese el texto actual de la norma por el siguiente:

"Los cargos de concejales serán incompatibles con los de miembro de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales, así como con las funciones públicas señaladas en las letras a) y b) del artículo anterior. También lo serán con todo empleo, función o comisión que se desempeñe en la misma municipalidad, con excepción de los cargos, no directivos, profesionales y no profesionales en educación, salud o servicios municipalizados. En el caso de que estos últimos funcionarios desempeñen a su vez el cargo de concejal, el alcalde deberá respetar la autonomía en el ejercicio de las funciones de los concejales, especialmente la facultad de fiscalización".